

Informe Preliminar sobre el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño¹

Junio 2023



Introducción

Este documento presenta un contexto y el estado de la implementación del Acuerdo de Paz en la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño para la visita del Proyecto Del Capitolio al Territorio los días 13 y 14 de julio de 2023. Se usaron como fuentes las publicaciones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), información pública u obtenida a través de derechos de petición sobre la implementación del Acuerdo, y la percepción de líderes e instituciones entrevistadas en la visita previa desarrollada por el equipo del proyecto del 27 al 30 de abril de 2023.

La subregión de Cuenca del Caguán y Piedemonte caqueteño comprende todos los 16 municipios de Caquetá (Albania, Belén de Los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, Florencia, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso) y Algeciras en el departamento del Huila.

¹ Este análisis se centra en los municipios de Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso, (Caquetá).

Contenido:

1. Introducción
2. Estado de la implementación:
 - Seguridad Territorial
 - Reforma Rural Integral (RRI)
 - Solución al problema de las drogas ilícitas
 - Reincorporación
 - Reparación integral a las víctimas y justicia transicional



Esta subregión se ha caracterizado por los constantes procesos de colonización a raíz del aumento de la concentración de la tierra al interior del país, los incentivos estatales o colonización dirigida y la tensión y violencia política durante el periodo de La Violencia en los 50. Así mismo, su historia está marcada por la conformación de las guerrillas campesinas, la consolidación de las FARC en la región y la profundización del conflicto armado desde los 60, las economías de bonanza como los cultivos de coca en los 70² y el boom petrolero, la zona de distensión y los fallidos diálogos del Caguán y finalmente, las incursiones paramilitares en los 2000.

Es importante entender que la relación del Estado con la región durante muchas décadas se centró en promover y facilitar las economías de bonanza y extractivistas, por lo que la presencia estatal ha sido bastante limitada en términos sociales. Es así que “la acción del Estado, rezagada o equivocadamente planteada, ha sido sustituida, complementada o confrontada por actores que reclaman la regulación de estas sociedades”³.

La sociedad civil y sus organizaciones sociales campesinas e indígenas recogen esta historia y se conforman como instituciones fuertes y estructuradas. En el departamento existen 50 resguardos indígenas conformados por 5 pueblos originarios y 2 consejos comunitarios legalmente constituidos. Luego de la firma del Acuerdo de Paz, la región ha visto la recomposición de estructuras ilegales, la cual se ha evidenciado en la expansión del control social por parte de los grupos armados que han tenido como objetivo debilitar la autonomía territorial y a algunas organizaciones sociales.

A continuación, se presenta un balance de la situación de la subregión PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño recogiendo los retos, obstáculos y avances reconocidos por la institucionalidad territorial y nacional, y líderes de víctimas, PDET y PNIS en la subregión.

Estado de la implementación del Acuerdo de Paz

Seguridad Territorial

A diciembre de 2022, **la tasa de homicidios en la subregión fue de 34 personas por cada 100.000 habitantes**, 6,4 puntos porcentuales por encima del promedio nacional⁴. **Si bien esta cifra de 2022 representa una disminución del 6% con respecto al año anterior**, los actores que realizan seguimiento a este tema expresan que **las dinámicas de violencia se han intensificado a través de las desapariciones, amenazas, extorsiones, los hostigamientos y la aparición de panfletos y “pintas” (letreros en casas o lugares**

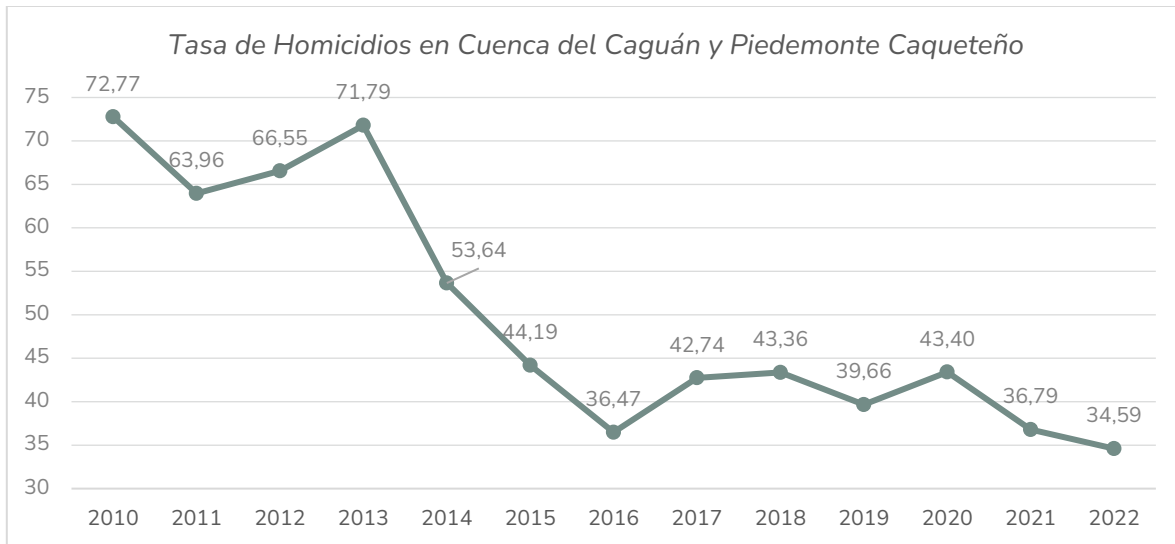
² Alberto Valencia. “Caquetá, violencia y conflicto social”, Conflictos Regionales (IEPRI-1998).

³ Delgado, T. V. (2015). Territorios, conflictos armado y política en el Caquetá: 1900 - 2010 (1st ed.). Universidad de los Andes, Colombia. <http://www.jstor.org/stable/10.7440/j.ctt18pkf31>

⁴ Cálculos propios a partir de información de la Policía Nacional y el DANE.



visibles que anuncian la presencia de un grupo), en distintos territorios rurales. Por lo tanto, las cifras de homicidios deben contrastarse y matizarse con las dinámicas propias de violencia de la subregión y de los grupos armados. La gráfica a continuación muestra el histórico de la tasa de homicidios desde el año 2010.



Fuente: Cálculos propios a partir de información de la Policía Nacional y el DANE.

- Entre 2016 y 2022 se han presentado en la subregión:
 - **29 homicidios de líderes sociales**, siendo 2019 el año más violento para el liderazgo social con 8 homicidios⁵.
 - **20 eventos de desplazamiento forzado**⁶.
 - **7 accidentes por MAP y MUSE**⁷.
- Desde la firma del Acuerdo de Paz se han registrado **20 acciones contra la Fuerza Pública y 3 enfrentamientos**⁸.

La suspensión del cese al fuego con el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC el 21 de mayo de 2023, es el último suceso en el marco de un consistente deterioro de la seguridad desde de la firma del Acuerdo de Paz y la salida del Bloque Sur de las FARC. Desde el 2016, grupos de delincuencia organizada suplieron el control sobre las economías ilegales del departamento hasta que las disidencias de la Estructura 62 Miller Perdomo, ahora llamado Frente Rodrigo Cadete y liderado por alias Iván Mordisco, cooptaron o derrotaron estos grupos para consolidar el control hegemónico de la región en el 2018⁹. Sin embargo, los Comandos Bolivarianos de

⁵ Fundación Ideas para la Paz.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Defensoría del Pueblo, Alerta Temprana de Inminencia No 011-22.



Frontera, provenientes de Putumayo, y la Segunda Marquetalia, asentada en la cordillera de San Vicente del Caguán, han disputado violentamente este control dejando a la población civil en el medio. Las afectaciones repercuten en gran parte del departamento, como lo ha alertado la Defensoría del Pueblo a través de las Alertas Tempranas en las que ha establecido que 11 de los 16 municipios de Caquetá se encuentran bajo escenarios de riesgo inminente.

La multiplicidad de actores armados y el escenario de disputa han llevado a que los grupos intensifiquen sus medidas de control social sobre las comunidades, generando un incremento en extorsiones y su base gravable (antes por hectárea, ahora por vaca o litro de leche), la carnetización para moverse en el territorio, el reclutamiento y el trabajo forzado. Estas formas de control social se extienden a algunos resguardos indígenas, que se ven limitados a la hora de realizar sus prácticas ancestrales como la caza o pesca.

Durante los 141 días que se mantuvo el cese al fuego con el EMC, estas medidas se intensificaron: las disidencias intentan cooptar algunas guardias campesinas, suplantar espacios organizativos de la sociedad civil y amenazan a las JAC y resguardos indígenas para que envíen reclutas a sus filas. Casos de desplazamiento forzado, amenazas o desapariciones no se reportan debido al miedo de que los grupos armados tomen represalias. Las autoridades locales e iglesia no pueden ingresar a las zonas rurales sin permiso o sin carné autorizado por los actores armados. Las autoridades reclaman por el repliegue, debilitamiento e inacción de la Fuerza Pública.

Adicionalmente, como alertan instancias de cooperación y seguimiento, **el cambio de narrativa alrededor de la Paz Total ha generado incertidumbre en los líderes y lideresas sociales del territorio. Las personas están exigiendo una estrategia clara y definida que permita garantizar la seguridad a nivel territorial.** La ausencia de esta pone en riesgo a las comunidades, y en especial, a las guardias de la cordillera, que, según los reportes, son uno de los sujetos más vulnerables ante los grupos armados que operan en la región.

El EMC también ha impulsado colonizaciones dirigidas a baldíos de la nación y al resguardo Yaguará II, mientras que en otras zonas de control han impuesto multas y castigos para prevenir la deforestación y las quemas. Esto parece ser un “gesto de buena fe” ante las negociaciones de Paz Total, ya que antes de estas el grupo fomentaba la tala y quema en zonas de importancia ambiental como el Parque Nacional Natural Los Picachos.

Reforma Rural Integral

Frente al enfoque participativo de los PDET, las instituciones afirman haber entablado diálogos para la socialización y consulta de los proyectos con los nueve delegados de grupos motor; sin embargo, **los líderes insisten en que es necesario generar mecanismos de participación que trasciendan la socialización y que les permitan tener más incidencia**



en la toma de decisiones y en la administración de recursos. También denuncian que en diversos municipios de la región se inició la ejecución de proyectos que no fueron socializados ni priorizados en los grupos motor.

Por otro lado, sobre la implementación de los PDET, líderes y lideresas insisten en que, si bien se están ejecutando los proyectos, algunos se reportan como ejecutados, pero no han iniciado. También se mencionan sobrecostos y la entrega de productos de mala calidad. **Estas denuncias son especialmente preocupantes teniendo en cuenta que esta es la segunda subregión con mayor financiación.** Estos hechos han deteriorado la confianza de los líderes en las instancias de implementación y ejecución de los PDET.

Si bien líderes y lideresas insistieron en la necesidad de fortalecer las instancias de participación de los PDET y los grupos motor, tanto ellos como otras instancias de cooperación y seguimiento insisten en que deben priorizarse otras iniciativas de desarrollo comunitario además de los PDET. Consideran que la priorización debe impulsarse, pero no invisibilizar otros procesos de desarrollo comunitario que no están directamente vinculados como PDET.

Sobre las dinámicas de acceso a tierras, **según las cifras oficiales se han entregado 128.420 hectáreas en la subregión.** Sin embargo, durante la visita preliminar, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no reportó el número de hectáreas entregadas actualizadas debido a que, por la reciente inauguración de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) en Florencia, está avanzando en el acompañamiento de casos de titulación de tierras para comunidades étnicas. La percepción generalizada es que la adjudicación y formalización de tierras no se adelanta de manera eficaz.

Indicador	Cifra
Acceso a Tierras	
<i>Hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras</i>	135.122
<i>Hectáreas entregadas</i>	128.420
PDET	
<i>Fecha de firma del PATR</i>	21/12/2018
<i>Iniciativas subregionales¹⁰</i>	100
<i>Iniciativas</i>	3.322
Pilar 1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo	290
Pilar 2. Infraestructura y adecuación de tierras	438
Pilar 3. Salud Rural	750
Pilar 4. Educación Rural y Primera Infancia Rural	391
Pilar 5. Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural.	291
Pilar 6. Reactivación Económica y Producción Agropecuaria	578

¹⁰ Estas iniciativas subregionales corresponden a las incluidas en el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) de Caquetá y agrupan las 3.322 iniciativas municipales.



Pilar 7. Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación	154
Pilar 8. Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz	430
Proyectos de OCAD Paz terminados	16 por \$68.540,9 millones
Obras PDET	154 por \$38.150,4 millones
Obras por impuestos	4 por \$72.091,24 millones
Puesto entre las subregiones PDET con más inversión	2

Fuente: ANT, vía Derecho de Petición.

Por otro lado, en la región se encuentra la **Zona de Reserva Campesina (ZRC) Cuenca del Río Pato y Valle de Balsillas**, ubicada al noroccidente del Caquetá en San Vicente del Caguán, entre el PNN Los Picachos y Huila. **Esta ZRC fue la primera en constituirse en el país en 1998 bajo las apuestas de las comunidades campesinas por la gobernanza territorial**, detener la expansión de la frontera agrícola y promover la protección ambiental. Según el SIG del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, la ZRC se traslapa con el resguardo indígena Altamira¹¹. En este momento, los campesinos de la ZRC del Pato-Balsillas se encuentran en busca de la dinamización de una consulta previa con el resguardo indígena para la ampliación de la ZRC, así como de la sustracción de Ley 2da de 1959 en la región del Bajo Pato. En Caquetá también avanza el proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina Cabeceras Orteguzza - San Pedro en los municipios de La Montañita, Florencia, El Paujil y El Doncello y la pretensión de la constitución de la Zona de Reserva Campesina de Guacamayas en San Vicente del Caguán.

Las organizaciones campesinas perciben la ZRC como una figura que garantiza la gobernanza campesina, la soberanía alimentaria y que protege al territorio de proyectos extractivistas como los petroleros y de hidroeléctricas. Para la ZRC del Río Pato, al igual que la mayoría de las ZRC a nivel nacional, persiste el reto de la formalización de la tenencia de la tierra dentro de esta territorialidad campesina y la implementación de los Planes de Desarrollo Sostenible.

En esta misma vía, el reto más grande frente a los compromisos con las comunidades étnicas es avanzar en el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz, particularmente en los temas de tierras vinculados a la ampliación de resguardos, lo que implica generar acuerdos entre los distintos pueblos que se encuentran en la región. Si bien el PDET logró contar con más de 12 instancias interétnicas, 1.200 iniciativas indígenas y 34 afrocolombianas, una de las dificultades es sobrepasar las barreras que imponen las diferencias culturales entre ambos pueblos.

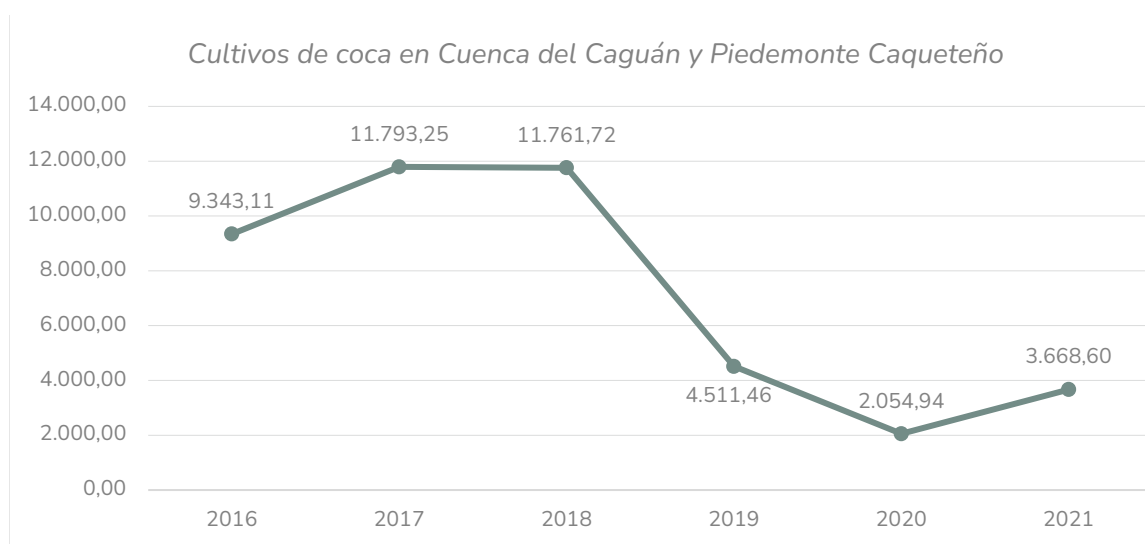
¹¹ Resolución 0012 de 1996.



Sin embargo, la institucionalidad reconoce que la dificultad para la ampliación o adjudicación de tierras está vinculada a las particularidades ambientales del PDET. El 71% de la región se encuentra en Zona de Reserva Forestal (ZRF) de Ley 2da de 1959, lo que se vuelve un limitante para las adjudicaciones en estas zonas y en zonas colindantes con el PNN. Una de las solicitudes de las comunidades es avanzar en el Plan de Zonificación Ambiental Participativa, siguiendo los acuerdos definidos en el paro de Altamira. Así, la zonificación será insumo para dar claridad sobre los derechos de uso y las áreas posibles para sustracción.

Solución al problema de las drogas ilícitas

- La tendencia a la baja en cultivos de coca de 2018 se revirtió en 2021, cuando incrementaron de 2.054,9 ha en 2020 a 3.668,8 ha en 2021 como lo muestra la siguiente gráfica. Aún no hay cifras oficiales publicadas por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) para 2022.



Fuente: Observatorio de drogas de Colombia.

- Al PNIS se vincularon **12.959 familias bajo acuerdos individuales de sustitución**. De estas, 8.461 son cultivadoras; 1.148 no cultivadoras y 3.350 recolectoras.
- Del Planes de Atención Inmediata (PAI) Familiar que reciben las familias cultivadoras y no cultivadoras:
 - 9.319 (**97%**) han recibido **al menos un pago de asistencia alimentaria**;
 - 9.477 (**98,6%**) han recibido **Asistencia Técnica Integral**;
 - 8.790 (**91,5%**) han recibido **proyectos de seguridad alimentaria**;
 - 8.671 (**90,2%**) tienen **acceso a proyectos productivos de ciclo corto y 366 (3,8%) cuentan con su ciclo largo**.



- Adicionalmente, aproximadamente **7.000 familias más firmaron acuerdos colectivos**, pero no fueron vinculadas a acuerdos individuales de sustitución del PNIS.
- **Solano y Milán, históricamente dos de los municipios con más coca, no ingresaron al PNIS por falta de recursos.** Aunque 3.650 y 400 familias respectivamente firmaron acuerdos municipales del PNIS en 2017, nunca se firmaron acuerdos individuales con las familias.

Los incumplimientos del PNIS y la erradicación forzada causaron decenas de marchas, protestas y bloqueos en la subregión desde el 2018. La confianza se deterioró hasta el punto de causar retenciones a miembros de Fuerza Pública en labores de erradicación y un rechazo a la institucionalidad, mientras los cultivos de coca empezaron a aumentar. **Para reconstruir la confianza y aterrizar el PNIS, el nuevo gobierno nombró a varios líderes campesinos y cocaleros en altos cargos de las regionales de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI).**

Este es el caso en Caquetá, donde el nuevo liderazgo **se ha propuesto cumplir el PAI Familiar a finales de 2024**, garantizar que los insumos entregados por los operadores sean de calidad, atender a los beneficiarios recolectores (la población con menos avances en la implementación de sus acuerdos), y reasumir los acuerdos de sustitución con población que se haya desplazado de su predio original. Sin embargo, **continúa preocupando la falta de articulación entre el PNIS y el punto 1 del Acuerdo, así como la falta de compromiso por parte de los gobiernos locales de implementar las obras de los Planes de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA) que surgen del PNIS.**

Bajo este panorama, el Gobierno le apostará a una nueva estrategia de sustitución gradual basada en la transformación del campo. La construcción de esta política se hará de abajo hacia arriba y empezará con diálogos municipales. El primero de estos en Caquetá se hará en Solano. Paralelamente, el Ministerio de Justicia viene desarrollando unas mesas para discutir la nueva política de drogas en ejes como género, uso problemático de drogas, transformación territorial, justicia restaurativa y tratamiento penal diferencial. No es clara la articulación entre estos dos procesos de participación.

Es también necesario explicar la crisis cocalera en la que ha estado sumida la región por casi un año. Desde el 2021, las disidencias de Iván Mordisco y los Comandos de Frontera emitieron directrices y cometieron “asesinatos ejemplificantes” para prohibir la venta de pasta base de coca a otros grupos o a compradores no autorizados. Esto causó compras intermitentes, miedo e incertidumbre a los cultivadores en territorios disputados entre los dos grupos. Algunos han preferido conservar la pasta base hasta que sea más segura su venta. Las disidencias también han impartido directrices de sembrar cultivos de pan coger en fincas con coca.



Otros factores como cambios en los mandos locales de Fuerza Pública, “gestos de buena fe” por parte de los grupos armados ante el inicio de negociaciones de Paz Total, el auge del fentanilo en el mercado norteamericano, la sobreproducción y la concentración de producción en enclaves cocaleros; también han generado que esta crisis se ahonde en Caquetá y otras regiones vecinas como Meta, Guaviare y Putumayo. **La crisis cocalera y el incremento en extorsiones a pequeños campesinos han tenido un profundo impacto económico en la región.**

Reincorporación

En la región de la Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño se encuentran tres ETCR: Miravalle, en San Vicente del Caguán; Agua Bonita ubicado en la Montañita; y Urías Rondón, en El Doncello. Los procesos de reincorporación de los firmantes en cada uno de los ETCR han sido diversos. La dinámica de reincorporación en la subregión tiene la particularidad de estar dividida geográficamente en dos tipos de procesos.

Por un lado, **en la zona norte¹² se concentra la mayor cantidad de personas en proceso de reincorporación según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).** Según las cifras presentadas por la institución durante la visita preliminar, de las 906 Personas en Proceso de Reincorporación (PPR) que se encuentran en el departamento, al menos 800 se encuentran en la zona norte.

Por otro lado, **en la zona sur¹³, según lo reportado por la ARN durante la visita preliminar, se encuentran las PPR de manera dispersa y las dinámicas de movilidad responden al desarrollo de sus proyectos de vida y el reencuentro con núcleos familiares, así como a las condiciones de seguridad.** Esta situación significa un reto para la atención y el acompañamiento integral a población firmante que se encuentra dispersa y sin proyectos de reincorporación claros, en contraste con los que se encuentran en la zona norte.

Frente a las condiciones de seguridad se presentan dos alertas. Primero, durante la visita preliminar se reportó la inseguridad jurídica de los firmantes que están siendo citados para comparecer ante la JEP. Según el reporte, se han emitido órdenes de captura contra personas que ya han cumplido tiempos de condena o que se le habían levantado las órdenes de captura. Esto además de incrementar la inseguridad jurídica de la población, pone en riesgo su movilidad en el territorio. Por otro lado, se mantienen los riesgos de seguridad para la población. Si bien durante la visita preliminar se manifestó no tener un problema de seguridad latente, el riesgo y la estigmatización siguen existiendo.

¹² La zona norte comprende los municipios de San Vicente del Caguán, Puerto Rico, El Doncello, Florencia, El Paujil, La Montañita.

¹³ Solita, Curillo, Valparaíso, Albania, Belén de los Andaquíes, Morelia.



- Según las cifras oficiales, obtenidas vía derecho de petición¹⁴, en la subregión PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño **habitan 960 personas en proceso de reincorporación. De estas, 730 son hombres y 230 son mujeres**¹⁵.
- De acuerdo con la ARN, en la subregión se han desembolsado **cuatro proyectos colectivos**¹⁶ que benefician a **226 personas** (líneas productivas agropecuaria, industrial y de servicios) y **528 proyectos individuales que benefician a 634 personas**. En resumen, se han desembolsado 532 proyectos que benefician a un total de 860 personas¹⁷.
- Desde la firma del Acuerdo de Paz, **se han reportado 37 homicidios a firmantes del Acuerdo en la subregión, así como 40 amenazas contra PPR**¹⁸.

A continuación, se presenta a nivel general el estado del proceso de reincorporación de los tres ETCR que se encuentran en la región:

Miravalle

El ETCR de Miravalle se encuentra en San Vicente del Caguán, en cuatro predios: El Salado, La Barcelona, La Esmeralda y La Florida. Cuenta con un total de 27 hectáreas y 1.586 mts². Habitan 36 personas, cuenta con 39 módulos habitacionales y tres áreas comunes: enfermería, biblioteca y áreas de creación.

La seguridad en la tenencia del predio que habita la población firmante continúa siendo incierta. De los cuatro predios en los cuales se ubica el ETCR, se determinó por la ANT y el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), iniciar el proceso de compra del predio La Barcelona, el cual se encuentra en etapa de validación de informes de visita técnica. Adicionalmente, de acuerdo al reporte de la ARN, se está avanzando en la fase preliminar de la identificación de predios con la gestión que permita la participación de las comunidades desde la voluntariedad de venta y la postulación de sus predios con fines de reincorporación a través del mecanismo de convocatoria pública de predios.

Por otro lado, la comunidad de Miravalle postuló dos predios en la vereda Puerto Amor, que se encuentran en Zona de Reserva Forestal Ley 2da; por lo que también realizaron la postulación de un tercer predio adicional en la vereda Balsillas dentro de la ZRC Pato-Balsillas. De acuerdo con el cruce de información, este predio también se encuentra en ZRF de Ley 2da, razón por la que se solicitó el concepto del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para adelantar el proceso de sustracción. En 2021, la ARN surtió la etapa

¹⁴ Las cifras presentadas obtenidas vía derecho de petición tienen diferencias con las presentadas por la ARN durante la visita preliminar. Si bien tienen diferencias, se presentan ambas con la intención de contrastar la información.

¹⁵ ARN. Respuesta a derecho de petición con radicado OFI22-025068.

¹⁶ En respuesta obtenida vía derecho de petición se reportaron cuatro proyectos colectivos. Sin embargo, en las cifras oficiales de la página web de la ARN, se reportan 10 proyectos productivos colectivos en ETCR Aguabonita y 10 en el ETCR Miravalle.

¹⁷ ARN. Respuesta a derecho de petición con radicado OFI22-025068.

¹⁸ FGN. Respuesta a derecho de petición con radicado 20225760008231.



técnica de levantamiento topográfico y la ANT surtió la etapa de estudio de títulos. Adicionalmente, CORPOAMAZONIA adelantó dos espacios para detallar las Áreas Forestal Protectora – AFP y brindar las directrices de manejo de estas áreas, ya que no condicionan el uso y la explotación de los predios.

- En este ETCR, **la ARN reporta haber desembolsado sólo un proyecto individual** en el sector pecuario
- Por otro lado, de acuerdo a la información que reporta la ARN del cruce con el régimen contributivo de salud para octubre de 2022, **se identifican a 26 personas del ETCR de Miravalle vinculadas laboralmente en el departamento de Caquetá**, cuatro de estas se encuentran vinculadas como independientes.
- Respecto a la empleabilidad en el ETCR, la comunidad señala que los proyectos colectivos deben incluir los costos de remuneración de la mano de obra de PPR vinculadas al proyecto, siguiendo los acuerdos de jornales de la ZRC, es decir, \$50.000 el jornal sumado a la alimentación.

Aguabonita

El ETCR de Agua Bonita, ubicado en el municipio de La Montañita, tiene un total de 53 hectáreas y 6.700 metros cuadrados. Este predio es propiedad de la comunidad firmante que habita el ETCR y fue adquirido a través de la estrategia de Transformación de los AETCR. Cuenta con 55 espacios habitacionales y tres áreas comunes: enfermería, biblioteca y áreas de creación. Sin embargo, no cuenta con sistema de acueducto ni conectividad.

El espacio tiene una potencial demanda de 193 personas en proceso de reincorporación a atender con vivienda. La ANT ha definido que realizará el proceso de adjudicación de tierras de manera individual para la implementación de los subsidios de vivienda. Una vez finalizado el proceso de adquisición de los predios, se realizarán los estudios correspondientes para dar cuenta de la viabilidad técnica del proyecto de vivienda. El área restante se adjudicará de manera colectiva a las personas en proceso de reincorporación para el desarrollo de proyectos productivos.

En este ETCR:

- De acuerdo con la información que reporta la ARN del cruce con el régimen contributivo de salud para octubre de 2022, **se identifican a 124 personas del ETCR de Agua Bonita vinculadas laboralmente.**

Urías Rondón

El ETCR Urías Rondón se encuentra ubicado en el municipio El Doncello y es habitado por 106 firmantes y 56 familias. Anteriormente, el espacio se encontraba ubicado en La



Macarena Meta. **Sin embargo, en 2021, la falta de garantías de seguridad y los riesgos de los habitantes del ETCR condujeron al desplazamiento forzado de los 43 habitantes del antiguo ETCR.**

Actualmente los firmantes se encuentran en un predio de 70 hectáreas con un documento provisional entregado por la ANT. Si bien el predio se encuentra listo para ser titulado, los firmantes no lo han recibido porque no gozan con las condiciones económicas y de infraestructura para asumir los costos que implica la adjudicación y los costos adicionales de mantenimiento del predio.

A pesar de que los firmantes de paz que se encuentran en El Doncello están avanzando en su proceso de reincorporación, insisten en la necesidad de recuperar las 13 líneas productivas que tenían consolidadas en el anterior espacio ubicado en La Macarena.

En este momento, **la priorización es el proyecto de vivienda y el puesto de salud para las 56 familias que se encuentran en el ETCR.** Esta iniciativa se está desarrollando a través del trabajo mancomunado entre la ONU, PNUD y el CNR.

Adicionalmente, este ETCR:

- **Cuenta con un comité de mujeres conformado por 40 personas** – 37 mujeres y 3 hombres.
- Cuenta con una **asociación de jóvenes conformada por 50 jóvenes de El Doncello.**
- **Aún no cuentan con proyectos de sanciones propias** relacionadas con los Trabajos, Obras y Actividades con contenido reparador-restaurador (TOAR) aprobados por la JEP.
- Frente a la seguridad, las amenazas a través de llamada telefónica son el mecanismo que generan mayor presión sobre los firmantes.
- Tienen la expectativa de **construir 20 viviendas en el 2023.**

Preguntas sugeridas a personas en proceso de reincorporación:

- ¿Cuántos TOAR se han aprobado por la JEP en la región PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño? ¿Estos TOAR han sido construidos de manera participativa con las comunidades de víctimas?
- ¿Qué retos implica para la atención a la población en proceso de reincorporación la dispersión?
- ¿Qué estrategias ha desarrollado la ARN para garantizar la inserción de la población firmante a la sociedad civil? ¿Se han desarrollado actividades comunitarias conjuntas?



Reparación integral a las víctimas y justicia transicional

Como el resto de los procesos sociales en Caquetá, las organizaciones y mesas de víctimas se nutren de los procesos de base y formación histórica y política del territorio. Las mesas de víctimas están estructuradas desde el nivel municipal hasta el departamental, se reúnen con constancia y cuentan con el apoyo económico de los gobiernos locales para su funcionamiento.

Sin embargo, **la indemnización se ha ralentizado substancialmente desde la entrada de este Gobierno, no se ve el impacto positivo de la reparación colectiva y no se vislumbra una estrategia clara de reconciliación y reparación en el territorio.** Por ende, las organizaciones han formulado planes y espacios de construcción autónoma para adelantar estos procesos y construir de abajo hacia arriba un enfoque verdaderamente reparador, especialmente de la mano de la GIZ.

El acompañamiento al pueblo Koreguaje para su informe e inclusión en el Macrocaso 09 de la JEP también resultó en la actualización de su plan de vida y la inclusión de su ruta de reparación colectiva dentro de este.

Comunidades enteras de víctimas lograron organizarse en grupos de búsqueda como las Mujeres Buscadoras de la Paz, pero la continuación de la desaparición forzada y el recrudecimiento del conflicto armado en la región ha impedido el avance en la búsqueda de sus seres queridos.

Sobre las indemnizaciones

Número de víctimas	Víctimas sujetas de atención	Víctimas indemnizadas	Porcentaje de víctimas indemnizadas
211.411	193.651	31.513	16,2%

- A corte de julio de 2022, **27.874 víctimas han sido atendidas por el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas en la subregión**; de estas, más de 10.000 han sido atendidas en la ciudad de Florencia. Anualmente, El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) ha atendido un promedio de 3.190 personas en la subregión Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño¹⁹.
- Víctimas de la subregión recalcan que este programa se queda corto y no cuenta con un impacto reparador.

¹⁹ MSPS. Respuesta a derecho de petición con radicado 2022423302092592



Sobre la Reparación Colectiva

Tipo de Sujeto de Reparación Colectiva				
Etapa	Étnico	No Étnico	Organización o Grupo	Total
Identificación	2	0	0	2
Alistamiento	23	1	2	26
Diagnóstico del Daño	N/A	2	0	2
Caracterización del Daño	0	N/A	N/A	0
Diseño y formulación del PIRC	3	1	0	4
Implementación del PIRC	3	2	0	5
PIRC Implementado	0	0	0	0
Total	31	6	2	39

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la UARIV.

- Autoridades locales reiteran que el cumplimiento de Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) de grupos étnicos **implica resolver una serie de conflictos interétnicos y jurisdiccionales** y por tanto las instituciones prefieren ignorar el tema.
- **La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) ha publicado 3 Planes Regionales de Búsqueda -PRB-** que comprenden municipios de la subregión PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño. Por un lado, el PRB Caquetá Sur que integra los municipios de Belén de los Andaquíes, San José del Fragua, Curillo, Albania, Valparaíso y Solita; el PRB Caquetá Centro, que incluye a Florencia, Morelia, La Montañita, Milán y Solano, y el PRB Caquetá Norte, que agrupa El Paujil, El Doncello, Puerto Rico, San Vicente de Caguán y Cartagena del Chairá. El único municipio de la subregión que no está incluido en Planes de Búsqueda es Algeciras (Huila).



Del Capitolio al Territorio es un proyecto que hace seguimiento, junto a la Comisión de Paz del Congreso de la República, a la implementación del Acuerdo de Paz en los territorios más afectados por el conflicto y la pobreza. Esta iniciativa cuenta con el apoyo financiero de la Embajada del Reino Unido en Colombia y la secretaría técnica de la Fundación Ideas para la Paz.

Más información en:

www.delcapitolioalterritorio.com

**Este documento no refleja las opiniones, posiciones o ideas de estas entidades, organismos y cooperantes, como la Fundación Ideas para la Paz y la Embajada Británica.*